

I Edición Premios Longevia BBVA

Resolviendo los retos del envejecimiento poblacional en España.

Madrid, Marzo 2020

Detalle de los trabajos de investigación galardonados en la edición y otros seleccionados.



2.3. Juan Agustín Franco Martínez

Jubilación y cotizaciones subrogadas: Innovaciones económicas y financieras para un sistema sostenible de bienestar social

Autor: Juan Agustín Franco Martínez

Resumen

Los nuevos retos demográficos, migratorios y tecnológicos globales están suponiendo un replanteamiento del mercado laboral español y de los mecanismos redistributivos para el sostenimiento del bienestar social. La persistencia de la pobreza y la agudización de los procesos de feminización de la misma implican, particularmente, una revisión de los esquemas de financiación ‘no contributiva’ de la jubilación que en España afectan principalmente a las mujeres, reconociendo en primer lugar que en el trabajo no remunerado (doméstico y de cuidados) se están generando procesos ocultos de transferencia de ahorros que son la fuente de continuos flujos de cotizaciones subrogadas. Para aflorar tales flujos y mejorar la eficiencia del sistema financiero se plantean distintos escenarios posibles de políticas públicas, incorporando al sistema una mayor progresividad fiscal, además del derecho a una renta básica universal (RBU) y nuevas monedas virtuales de carácter social y complementario.

Palabras clave: Transferencia de derechos, pobreza, feminización, garantía de ingresos y trabajo, biodiversidad monetaria

**RETIREMENT AND SUBROGATED QUOTATIONS:
ECONOMIC AND FINANCIAL INNOVATIONS FOR A
SUSTAINABLE
SYSTEM OF SOCIAL WELFARE**

Abstract

The new global demographic, migratory and technological challenges are assuming a rethinking of the Spanish labour market and redistributive mechanisms for the maintenance of social welfare. The persistence of poverty and its growing feminization processes involve, in particular, a review of the 'non-contributory' retirement financing schemes that mainly affect women in Spain. For this, it is recognized that unpaid work (domestic and care) generates hidden processes of transference of savings that are the source of continuous flows of subrogated contributions. To surface these flows and improve the efficiency of the financial system, several scenarios of public policies are discussed, incorporating more fiscal progressivity, also the right to the universal basic income (UBI) and new virtual currencies (of social and complementary character) into the system.

Keywords: Transference of rights, poverty, feminization, guarantee of income and labour, monetary biodiversity.

“Aporofobia: Neologismo que da nombre al miedo, rechazo o aversión a los pobres”.

(Palabra del año 2017 de la Fundéu BBVA, término acuñado por la filósofa española Adela Cortina).

“La situación de las personas (mujeres en su mayoría) perceptoras de PNC constituye la mayor injusticia del actual sistema de pensiones”.

(María Pazos, 2013: 161).

2.3.1. Introducción

La responsabilidad económica y la justicia social no van siempre de la mano o no van lo suficientemente unidas, por paradójico que a priori nos pudiera parecer, aunque es lo normal en las economías capitalistas, lo que es fuente de conflictos crecientes en un contexto global cambiante y cada vez más incierto a todos los niveles: sociológico, tecnológico, demográfico, climático, político, económico, laboral, financiero, jurídico...

Nuevos retos como la transición demográfica o la sostenibilidad financiera del bienestar exigen ideas innovadoras más allá de lo tecnológico, también económicas, jurídicas e institucionales. Nuevos y viejos retos ante los inciertos escenarios emergentes a nivel climático, demográfico y migratorio, como la pobreza y la feminización de la misma, que no somos capaces de erradicar, pese a que contamos con los medios para ello, pero al parecer todavía no con los marcos legales e

institucionales adecuados, muy insuficientes para frenar el avance de la aporofobia y la misoginia (López Ortega, 2017; Franco, 2018b), entre otros procesos y desigualdades que contribuyen a mantener estructuras económicas ineficientes como la división sexual del trabajo y los techos de cristal (Pazos, 2013; Staveren, 2014; De Miguel, 2015; Castro, 2018).

Como señala Miller (2019: 116): “Varios estudios han relacionado el desempleo, la pobreza y la consiguiente desigualdad con efectos negativos para la salud mental, tales como depresión, ansiedad, estrés, bajo bienestar subjetivo y baja autoestima”. Problemas de salud que seguirían estando presentes incluso en un hipotético escenario de eterna juventud donde nadie tuviera que jubilarse nunca.

En este nuevo contexto de incertidumbre en red se hace necesaria una gestión estratégica de las oportunidades y amenazas demográficas emergentes con perspectiva de género. En este sentido nos encontramos todavía con demasiada frecuencia ante situaciones que requieren nuevos enfoques, nuevas perspectivas y que, sin embargo, se abordan con soluciones y propuestas que o bien las difieren y agravan o bien las diluyen y cronifican.

Desde esta óptica innovadora y socialmente comprometida se sugiere aquí el desarrollo de una nueva subdisciplina en el marco de la Economía del Derecho que aborde principalmente la conexión entre bienestar y robótica desde un enfoque de igualdad de género ante los nuevos retos demográficos y migratorios. En otras palabras, la rama económica de la Transferencia de Derechos. Esto es, la conexión entre uno de los problemas clave para la sostenibilidad financiera del bienestar social en general (y de la jubilación en particular) y la incorporación masiva de la inteligencia artificial y la robótica en el mercado laboral: la

transferencia de derechos en la creación de valor. La rama de la Economía del ‘Derecho de Transferencia’. Y muy en particular nos centraremos en el caso de la transferencia del ahorro, cuyos efectos nocivos afectan principalmente a las mujeres, al trabajo y al empleo femeninos. En cierto sentido esta “transferencia de ahorros” es una externalidad positiva para quien se beneficia de ella, pero negativa para el agente perjudicado y para la sociedad en general, puesto que de facto se trata de una extensión y profundización de la explotación laboral según se desprende de la clásica ley del valor-trabajo de Marx (Franco, 2018a).

Sin embargo, con frecuencia las controversias ideológicas sobre el mejor sistema de jubilación (de reparto o de capitalización) nos distraen del hecho cierto de estar frente a un sistema mixto de ahorro (transferido) que afecta cada vez más a mayores capas sociales y en el que quienes participan en él no disfrutan de las ventajas de ninguno de los dos sistemas y, en cambio, soportan casi todos los inconvenientes de ambos. Temporeros del campo, empleadas del hogar, camareras de piso, cuidadoras, falsos autónomos, etc. El ejemplo paradigmático es el de las amas de casa que curiosamente la contabilidad pública oficial etiqueta como ‘población inactiva’ pese a ser de las más activas de acuerdo con las Encuestas de Empleo del Tiempo.

“Es decir, los trabajos domésticos y de cuidados sirven para hacer frente al ciclo económico. Por otro lado, una de las derivadas de la crisis son los fuertes recortes en servicios públicos de cuidados esenciales. Estos recortes no se limitan a ahorrar gasto público, sino que con ello se producen transferencias de cargas del Estado a los hogares” (Carrasco, 2014: 86).

Es curioso también que pese al amplio abanico de actividades sociales y medioambientales que abarcan las redes de monedas locales y complementarias (incluidos los bancos de tiempo), ninguna de ellas se centre en las actividades y trabajos que realizan las mujeres y que se encuentran al margen de la distribución del dinero de curso legal (que mayoritariamente controlan y circula entre los hombres). De ahí la importancia de los análisis y desarrollos feministas en el debate sobre el derecho a la renta básica universal (Puga et al., 2014; Franco, 2020).

En los siguientes epígrafes abordaremos con más detalle los principales elementos relacionados con esta nueva subdisciplina de la Economía del Derecho, para analizar y denunciar principalmente las transferencias de derechos que se producen en el ámbito laboral y financiero, conectándola con la legítima igualdad de género, con la lucha contra la pobreza, con los nuevos avances e implicaciones laborales de la robótica y de los bancos de tiempo y monedas virtuales, además de los distintos modelos de renta básica y garantía de ingresos y, en definitiva, con la defensa de los sistemas públicos de pensiones (Pazos, 2013; Navarro y Torres, 2013; Etxezarreta e Iglesias, 2019). Finalmente se exponen las principales recomendaciones y conclusiones de este trabajo, así como las futuras líneas de investigación.

3.3.2. La cotización subrogada

“Conviene recordar la importancia de poner nombre a las cosas para hacerlas visibles. Si no lo tienen, esas realidades no existen o quedan difuminadas. No se pueden defender o denunciar”.

(Joaquín Muller, Director General de la Fundéu BBVA, 29/12/2017).

¿Qué entendemos por ‘transferencia’ de derechos? Se trata de un concepto técnico, eminentemente económico y jurídico, que abarca situaciones que van desde un mero traspaso voluntario de derechos (como un contrato para participar en un concurso televisivo tipo ‘gran hermano’ u otros realities) hasta aquellas otras donde hay usurpación o robo de la identidad (como clonar tarjetas de crédito). Entre ambos polos hay posiciones intermedias en las que no media ni la completa voluntariedad en la cesión de derechos ni la completa involuntariedad o usurpación de los mismos, y donde también se producen situaciones fraudulentas o hay lagunas legales que impiden identificarlas y atajarlas.

Una de esas situaciones típicas de transferencia de derechos es, por ejemplo, la de la mujer rural, que habiendo trabajado toda su vida en la explotación agraria familiar, titularidad del marido, nunca ha cotizado, por lo que no tiene derecho a pensión contributiva de jubilación (en España sólo el 20% de las mujeres son receptoras de esta pensión). Aquí la cuestión clave es la siguiente: Realmente ¿nunca han cotizado? Desde luego no para sí mismas (aunque sí por sí mismas), pero sí a través del titular de la explotación: del marido, que es quien termina siendo injustamente el único beneficiario legal. Y en general ocurre lo mismo en todas las familias de tipo tradicional basadas en el modelo del varón sustentador principal.

Como señala Carrasco (2014: 204), respecto al modelo de familia tradicional, se trata de “una construcción teórica más que una realidad histórica, que sólo se dio en puridad en algunos periodos y no para todas las clases sociales, y que en la actualidad está más que superado a pesar de que las políticas públicas y las instituciones sigan ancladas en ese modelo”.

Este caso es extensible, por tanto, a la mayoría de mujeres ‘amas de casa’ y ‘empleadas del hogar’ que reciben mayoritariamente la mal llamada ‘pensión no contributiva’ (PNC) porque ni es pensión ni es no-contributiva. No es pensión porque la RAE ni la contempla (entre sus 8 acepciones) y porque es más una ayuda de emergencia social que tiende a cronificar la pobreza. Y no es no-contributiva porque realmente sí hay contribución de hecho, aunque todavía no de derecho. Se trata, pues, de una laguna legal, como mínimo. En buena lógica podría considerarse que se ha producido una ‘cotización subrogada’. Por lo que siguiendo esta lógica habría que hablar de pensiones de jubilación subrogadas y no subrogadas. Poniendo en el centro del debate las primeras, cosa poco habitual incluso entre los análisis de orientación progresista que tienden a dedicarle unas escasas palabras.

¿Qué entendemos por ‘cotización subrogada’? Aquella situación en la que el trabajo realizado por una persona genera derechos para terceros. Ni la persona empleada ni la empleadora cotizan por el trabajo desempeñado, lo que acaba generando una liberación de tiempo y de recursos monetarios para que la misma empleadora y/u otras personas familiares puedan trabajar y cotizar por sí mismas. Así, en rigor, de esas cotizaciones finales devengadas participa también la primera empleada de la cadena de transferencia de derechos, el eslabón más débil.

Pensemos, por ejemplo, en la situación típica de la empleada de hogar que trabaja sin contrato y a la que de hacérselo se le pide que sea ella con su pequeño sueldo la que se pague la Seguridad Social. Esta solución es a efectos prácticos un modelo de ‘falso autónomo’ y que las mismas empleadas de hogar rechazan frente a otras opciones fiscales y tecnológicas más eficientes como las deducciones y subvenciones del 100% de la cuota de la Seguridad Social de la persona empleada en el

servicio doméstico (De Villota, 2011: 144-145) o la financiación paralela y complementaria de la Seguridad Social a través de la creación de una moneda virtual (Calaza y Güell, 2012).

De esa misma cadena de transferencia de derechos se derivan precisamente las denominadas cadenas globales de cuidados, que no son más que un caso particular a escala internacional de transferencia de la responsabilidad de cuidados desde los hombres hacia las mujeres de un país y de éstas hacia las mujeres inmigrantes. El carácter profundamente discriminatorio e injusto de todo este proceso es flagrante, más aún la enorme brecha jurídica para poder cerrar ese abismo o al menos tender algún puente. Es precisamente en esta segunda línea en la que se entronca la propuesta principal de este análisis económico sobre la cotización subrogada y su financiación a través de diversos medios: desde una fiscalidad más progresiva hasta la implantación de monedas virtuales complementarias (esto es, que permiten realizar y aflorar transacciones que sin tal moneda no se realizarían o se realizarían en condiciones injustas y abusivas), pasando por la implementación del derecho a la renta básica universal (Franco, 2020).

Como se ve, esta situación también admite matices intermedios, esto es, ‘cotizaciones subrogadas’ parciales, como sería el caso de contratos laborales a jornada parcial, pero en los que en la práctica se trabaja a jornada completa o más horas de las pactadas, algo bastante habitual en el sector de la hostelería, del turismo o de las empleadas de hogar, por citar algún ejemplo. Situación que podría aflorarse, entre otras formas, si existiera una moneda electrónica complementaria, que por definición no es inflacionista.

Respecto a las mujeres rurales la solución deficiente que adopta la Ley 35/2011 (sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias) es unir a empleado y empleador en una misma persona jurídica, la figura del autónomo, del empresario que es dueño y trabajador de su propio negocio. Al final se produce una doble transferencia cruzada que refuerza y cronifica la tendencia permanente hacia una situación de vulnerabilidad y exclusión social de las mujeres. Por un lado se transfiere el derecho de cotización y por otro se recibe la transferencia de responsabilidad que debiera asumir la Administración Pública en una buena gestión del mercado laboral. De hecho, desde su creación en 2011 y hasta 2018 sólo se han registrado bajo este régimen de titularidad compartida poco más de 600 explotaciones en toda España. Un registro muy bajo teniendo en cuenta que “estas mujeres representan más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares, siendo los hombres quienes figuran como titulares, mientras que las mujeres lo hacen como cónyuges en la categoría de ayuda familiar” (Junta de Extremadura, 2019: 28).

Han sido los Tribunales de Justicia los que en buena medida están poniendo algún freno a estas prácticas abusivas, especialmente en el caso de los ‘falsos autónomos’ en el ámbito de las nuevas economías de plataformas, de lo que inicialmente se comenzó a llamar, quizá de forma muy optimista, como ‘economía colaborativa’, pero que ha degenerado en auténticas situaciones de precariedad e ilegalidad laboral, con el consiguiente perjuicio para el sostenimiento de cualquier tipo de ahorro o sistema de jubilación.

Toda buena legislación sobre la cotización subrogada requiere al menos dos principios básicos: retroactividad y consideración de su efecto multiplicador.

Respecto a la retroactividad, ésta viene justificada por el mismo derecho que cualquier otra pensión, pues se trata de un tipo de ahorro, ya sea para sí mismo en el futuro o para los pensionistas actuales (con el compromiso de ser beneficiario del mismo trato en el momento de la propia jubilación).

Y respecto a su efecto multiplicador, baste tener en cuenta que la cotización subrogada no beneficia a quien la genera (quien la ‘engendra’) sino a quien se la transfiere, pudiendo éste a su vez generar cotización para sí gracias a la liberación de tiempo obtenida del primer eslabón cotizante.

En consecuencia, la mejor forma de abordar la cuestión de la cotización subrogada sería a través de dos aspectos financieros que rara vez se han conectado entre sí. En primer lugar, entendiendo el proceso de transferencia de cotizaciones como un sistema de expansión de activos similar al de creación del dinero bancario, sólo que en otra moneda (complementaria) de facto, aunque intangible y oculta. Y en segundo lugar, tratando las pensiones de jubilación subrogadas de forma equivalente a los productos financieros CFD (contracts for difference, contratos por la diferencia), que en nuestro caso serían ‘cotizaciones por la diferencia’, donde la pensión de jubilación se liquidaría como la diferencia entre las cotizaciones generadas en un empleo a tiempo completo durante el mínimo de años necesario para tener derecho a la pensión máxima y las cotizaciones realmente realizadas hasta la edad de jubilación. De esta forma se estimula la inserción en la economía formal y el afloramiento de las cotizaciones subrogadas. Veamos a continuación brevemente cada uno de estos aspectos financieros.

2.3.2.1. Proceso de expansión de las cotizaciones

Si la creación de dinero bancario se regula mediante la suma de elementos de una progresión geométrica a partir de una cantidad inicial de dinero legal (billetes y monedas), cuyo efecto multiplicador depende del coeficiente de caja (reservas obligatorias), casi del mismo modo se expande la cotización financiera a partir de una cotización inicial (teórica) basada en un trabajo (pagado o no), pero no reconocido legalmente (por lo que no genera derechos laborales ni de jubilación) que se multiplica por un factor fijo o variable que, en este caso, no depende directamente de ninguna institución central (porque ninguna lo reconoce ni lo regula). Por lo que una solución económica y tecnológica viable sería la creación de una moneda electrónica complementaria que contabilizara esta producción como computable en el PIB.

La creación de entidades bancarias que registren tales flujos y derechos de tiempo de trabajo (altamente expuestos a la subrogación obligatoria de su cotización) sería una innovación institucional que contribuiría a la generación de nuevos empleos y a una reducción significativa de la economía sumergida. Además de no ser inflacionista. Se trata de una interesante solución sin prejuicios ideológicos, los que impiden captar la relevancia en toda su dimensión. Se trata de servicios de limpieza, cocina, (auto)cuidados, entre otros, no registrados en la contabilidad oficial pero que agregan valor efectivo a la economía nacional. Para verlo con mayor claridad bastaría plantear el escenario contrafactual: ¿sería igual de productiva y eficiente la economía de un país sin tales servicios y trabajos invisibles, no contabilizados, pero con un impacto real y visible sobre la economía del país?

Y del mismo modo que se generan deudas en ambos procesos de expansión (de dinero bancario y de cotizaciones subrogadas), también son tales deudas su principal diferencia, puesto que en el caso de la creación de dinero oficial, la banca puede reclamar lo adeudado por los depositantes que no devuelvan lo prestado, pero no así en el caso de la expansión de las cotizaciones subrogadas, puesto que en tal expansión se produce también una transferencia ilegítima y perversa de la titularidad de la misma. El que genera la cotización por su propio trabajo pierde el control de la misma en el proceso mismo de expansión. No existen vías para reclamar lo prestado, salvo quizá parcialmente a través de la paradójica fórmula ‘solidaria’ de la ‘pensión no contributiva’. De ahí el interés, por ejemplo, en las criptomonedas complementarias y en los modelos anticapitalistas de renta básica universal (e.g. Pinto, 2003; Iglesias, 2006; Franco, 2020). Pero, ¿sería posible aprovechar de alguna manera los instrumentos financieros ya existentes para mejorar la financiación de las pensiones?

2.3.2.2. Cotizaciones por la diferencia: Los nuevos CFDs

En esta sección vamos a intentar establecer un paralelismo preliminar entre los CFDs y las cotizaciones sociales para plantear una previsible forma de financiar y aflorar las cotizaciones subrogadas.

Los clásicos CFDs se caracterizan por ser productos financieros de alto riesgo, que no cotizan en un mercado oficial, con los que se puede operar con cierto apalancamiento (uno de sus principales inconvenientes), aportando como garantía un pequeño porcentaje del nominal. Estableciendo cierto paralelismo con los CFDs, se observa que esa misma característica de apalancamiento define también el sistema de ahorro para las jubilaciones, puesto que se difieren en el tiempo las

posibilidades de consumo presente que tales flujos permitirían, por lo que se convierten en promesas de consumo futuro, esto es, se generan deudas que contraen otros agentes al hacerse con parte de esas cotizaciones para sus propias decisiones de consumo, ahorro e inversión. En el futuro se podrían liquidar tales ‘préstamos’ como si se tratara de CFDs, de manera que el titular de la cotización inicial nunca perdiera el control ni la propiedad de la misma, asumiendo así el ‘inversor’ el riesgo de pérdida o ganancia en función de la evolución salarial futura del cotizante.

Si bien lo realmente interesante de esta comparativa con el CFD no es tanto la visión de futuro como la de presente, ya que otra característica que hace atractivo a estos productos financieros es su liquidez, lo que permite operar con ellos en el muy corto plazo. Esta condición de liquidez también aportaría soluciones inmediatas al afloramiento de las cotizaciones, si bien serían necesarios realizar estimaciones y cálculos de posibles escenarios para precisar con mayor exactitud su diseño, su regulación y sus efectos.

De esta manera, con este tratamiento del ahorro para la jubilación como si fuera un CFD ligado a la evolución salarial del cotizante (es decir, el subyacente del activo financiero), al inversor le interesará que al cotizante le vaya laboralmente bien y, en cambio, sufrirá pérdidas si el cotizante sigue en la economía informal o sumergida, pues deberá abonarle (reintegrarle) a la edad de jubilación (o al instante si se prorratea el cálculo, atendiendo a su gran liquidez) la diferencia de las cotizaciones subrogadas, esto es, del ahorro transferido.

En definitiva, con este sistema de neo-CFDs nos interesan dos cosas, por un lado, mantener integrados en el sistema laboral a la mayoría de agentes económicos; y por otro lado, contabilizar todos los trabajos que por distintas razones se realizan habitualmente al margen del empleo remunerado.

Además, de esta forma se están homologando dos soluciones redistributivas que a veces se presentan como contrapuestas. Por un lado, la solución postkeynesiana de la garantía de trabajo (Fullbrook y Morgan, 2019), sea éste remunerado o no conforme al mercado (porque en ambos casos genera cotizaciones). Y por otro lado, la solución del ingreso garantizado bajo la fórmula de la Renta Básica Universal (Davalá et al., 2015; Arcarons et al., 2014). Esta última propuesta es defendida con distintos argumentos por diversas y contrapuestas concepciones ideológicas (Franco, 2020), desde liberales a no liberales, si bien aquí nos interesa una concepción de síntesis, humanista y científica, la que supera las polémicas y entiende la necesidad de contrarrestar los fallos del mercado laboral y dar cobertura universal a las necesidades básicas de todo ser humano (Pogge, 2002), especialmente en un contexto en el que la robotización tiende cada vez más a sustituir el trabajo humano por algoritmos y procesos de inteligencia artificial (Pistono, 2012). Incorporando en su análisis una visión más amplia del trabajo que no se restringe en exclusiva al empleo o trabajo asalariado, idea que comparten corrientes económicas críticas como, por ejemplo, el marxismo, el feminismo o el ecologismo. En última instancia se trata de erradicar la pobreza, generando las condiciones de libertad económica suficiente al alcance de todas las personas con independencia de sus hándicaps y circunstancias de partida, que no de sus méritos, esfuerzo y talento.

Postura que, por cierto (y como es lógico, podríamos añadir), se acepta tanto desde posiciones netamente liberales como no liberales, pero con confluencias profundamente humanistas (Pogge, 2002; Pistono, 2012). Como afirma contundente Ralston (2013: online): “Muchos conservadores, liberales y socialdemócratas responsables están de acuerdo en que sería mucho mejor una renta garantizada anual. Supondría liberar a la sociedad, devolver a la gente el respeto por sí misma. La gente humillada o marginada se sentiría parte de la sociedad. Es curioso, pero hay mucha gente que está de acuerdo con estas ideas”.

En esta línea sobre la garantía de ingresos cabe subrayar también que las mayores críticas a la renta básica universal se centran en la forma de financiarla y en su condicionalidad, aspectos que han sido analizados y discutidos en las diversas investigaciones que existen sobre este tema (e.g. Raventós y Wark, 2015; Pérez, 2015). Si bien todavía existe cierta confusión en la opinión pública, y en la propia academia, al denominar igual a propuestas de renta básica que son muy diferentes, incluso contrapuestas: Unas abogando por la sustitución y abolición del Estado de Bienestar y otras apostando por reforzarlo y democratizarlo más aún (Franco, 2020).

El problema de la financiación es obvio que es en gran medida un debate artificial desde el momento en que sí existe dinero para unas cosas y no para otras. Es una cuestión de prioridades y de modelos de redistribución de la renta y la riqueza, cuyas preferencias han de expresarse de forma democrática.

Respecto a la otra objeción, gran parte del debate sobre la condicionalidad exigida para la concesión de una renta básica se vería

diluido si se contabilizara el trabajo invisible y no remunerado que se realiza fuera del sistema oficial, pero complementario e indispensable a él. Lo que reabriría el debate hacia otras propuestas conexas a la renta básica, como es el impuesto negativo, el cual implica la participación (y contribución) en el sistema de Seguridad Social a través de las cotizaciones. Pero, ¿podemos hablar todavía de rentas del trabajo que cotizan a la Seguridad Social en un contexto crecientemente hipertecnológico?

2.3.3. Robótica, monedas virtuales y cotizaciones sociales

Avancemos un poco más. El concepto de ‘cotización subrogada’ es válido también para las nuevas realidades tecnológicas de inteligencia artificial y los procesos de robotización de la economía, incluyendo las nuevas soluciones tecnológicas en el terreno financiero y monetario, en particular, las criptomonedas o monedas virtuales, excluyendo las versiones especulativas tipo bitcoin que no contribuyen a la eficiencia ni estabilidad del sistema.

¿En qué medida se puede mantener la esfera productiva como fuente principal de financiación de la jubilación dado que los principales sujetos de la producción ya no son mayoritariamente humanos sino robots? ¿Cómo pueden introducirse las monedas virtuales complementarias en el sistema económico y financiero y, por extensión, el derecho a una renta básica universal?

Es indudable que las ganancias de productividad (que aumentan la riqueza) derivadas de la robótica generan un escenario en el que se pueden reducir los costes laborales, pero no necesariamente hasta el punto de empobrecer más a la clase trabajadora, porque en tal caso ¿de qué clase

de mejora o ganancia hablamos?, ¿y para quién? ¿De qué sirve un supuesto avance que supone un retroceso en la calidad de vida para la mayoría? O dicho con otras palabras: ¿Se puede excluir a alguien de las ganancias de productividad derivadas de la invención de la rueda?

Además, el valor que aparentemente produce el robot es en realidad una transferencia procedente de la fuerza laboral, sin la cual no se generaría excedente ni tampoco se podría mantener de forma sostenida, ya que las tareas de mantenimiento y vigilancia siguen netamente bajo control humano. Recordemos aquí la vieja ley (que no anticuada, también la ley de la gravedad es vieja y no por ello es obsoleta) del valor-trabajo, según la cual el beneficio no es más que una transferencia “legítima” de valor del trabajo hacia el capital. Sin olvidar que el responsable último subsidiario de cualquier avería o fallo técnico es humano. Un mal o insuficiente diseño de software, una rutina informática ambigua o vulnerable, el deterioro y desgaste del hardware, una inadecuada carga de trabajo, una revisión y control de engranajes y soportes básicos deficientes, entre otras fallas y averías, pueden generar un mal funcionamiento de la tecnología sin el debido control humano.

Un buen ejemplo de las sinergias entre máquina y humano es el de la aviación y los controladores aéreos. También en el ámbito de la medicina. Pero no sólo a nivel de puestos altamente cualificados. Hay sectores como el de la cocina en el que hay espacio para las alianzas entre tecnología y creatividad humana en el que el grado de especialización laboral puede ir desde el más bajo al más alto.

Y todo ello, por supuesto, lejos de distopías cinematográficas futuristas como *Matrix*, *Terminator*, *In Time*, *Elysium* o *Yo Robot*. Y lejos también de ficciones más amables y utópicas que reactualizan de diversas

formas el cuento de Pinocho, como *El hombre bicentenario*, *Inteligencia Artificial* o incluso *Eduardo Manostijeras*. Quizá la imagen más certera de esa coalición inteligente entre máquina-humano sea la de la mítica serie de televisión *El coche fantástico*, no superada aún ni siquiera por posteriores sagas multimillonarias de acción y grandes efectos especiales sobre coches o superhéroes.

Además, no es cierto, como sabe cualquier técnico de mantenimiento, que un robot ‘trabaje’ 24 horas, 365 días. Como todas las máquinas éstas necesitan reparaciones, limpieza, vigilancia, seguridad, actualizaciones que requieren tiempo y parones en la producción que es necesario contabilizar. Y aquí viene perfectamente a colación aquella fábula para niños, y no tan niños, de la liebre y la tortuga. Quizá la máquina corra más que un humano, pero puede ser que el exceso de confianza en el automatismo y la robótica acabe siendo rebasado por el avance lento y continuo del trabajo humano.

Si añadimos que los propios consumidores ya no son simples consumidores sino que también participan del proceso productivo como prosumidores (Rifkin, 2014), entonces podemos deducir que junto al trabajo mecanizado de los robots se puede extender el desarrollo de la legislación sobre ‘cotizaciones subrogadas’ mediante las cuales se imputan a los prosumidores los beneficios legales de disfrutar de una pensión de jubilación por el trabajo humano condensado en esos procesos productivos hipertecnológicos. Entendiendo por prosumidor a aquel consumidor de los productos y servicios de una empresa, la cual dispone de un proceso productivo robotizado y en el que el consumidor participa en algún grado, de forma activa o pasiva, en la mejora continua de los productos y servicios que oferta la empresa.

2.3.3.1. Garantía de ingresos y/o empleo

Mientras la economía se base en relaciones comerciales donde el dinero determine el poder económico y social, habrá que facilitar el acceso mínimo de las personas a los bienes básicos, lo que implica el acceso a los ingresos monetarios y recursos materiales que permiten adquirir tales bienes, ya sea a través de garantía de ingresos y/o de empleo. La literatura reciente sobre este aspecto es abundante (Fullbrook y Morgan, 2019; Franco, 2020). Tal garantía básica, ya sea de dinero o de trabajo (con el que acceder a ese dinero básico), no es incompatible con el desarrollo del máximo potencial y capacidades de cada ser humano, es tan sólo un umbral de partida, un derecho humano de existencia. Igual que la biodiversidad natural es valiosa en sí misma. El soporte vital indispensable para cualquier ulterior transacción o actividad productiva.

En buena medida es artificial y artificioso el debate académico entre garantía de ingreso básico o garantía de trabajo (para conseguir esos ingresos mínimos). Con frecuencia se olvida que el concepto de trabajo es más amplio que el de empleo o trabajo asalariado (Iglesias, 2006; Puga *et al.*, 2014; Pérez, 2015; Fullbrook y Morgan, 2019). Baste pensar en la cantidad de trabajo no remunerado de tipo colaborativo, de voluntariado y de cuidados que generan valor y riqueza, aunque no se contabilicen formalmente en el PIB ni en las estadísticas públicas oficiales.

Tabla 1. Perfil de personas perceptoras de RMI. Año 2015.

VARIABLE	MUJER	HOMBRE	% M	% H
Beneficiarios (total España)	446.117	343.555	56,5	43,5
Andalucía	101.572	39.915	71,8	28,2
Extremadura	19.399	9.261	67,7	32,3
Nacionalidad española	145.778	87.638	62,5	37,5
Nacionalidad extranjera	38.497	36.329	51,4	48,6
Familia monoparental	57.214	4.417	92,8	7,2
Víctima violencia género	5.095	272	94,9	5,1
Menos 25 años	8.658	2.920	74,8	25,2
25 y 34	45.389	23.090	66,3	33,7
35 y 44	60.039	40.509	59,7	40,3
45 y 54	44.147	39.451	52,8	47,2
Más 55 años	35.785	23.151	60,7	39,3
Total (grupos de edad)	194.018	129.121	60,0	40,0
Sin estudios	13.450	7.400	64,5	35,5
Primarios	39.297	28.711	57,8	42,2
ESO	33.031	26.042	55,9	44,1
Bachiller	15.043	11.278	57,2	42,8
Universitarios	6.941	5.031	58,0	42,0
Sin datos	78.601	44.677	63,8	36,2
Total (nivel de estudios)	186.363	123.139	60,2	39,8
Baja por inserción laboral	8.392	7.585	52,5	47,5

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2016: 51-66).

Numerosos informes e investigaciones muestran que mayoritariamente la población más pobre y vulnerable no tiende a anclarse a las prestaciones y subsidios como forma o estilo de vida (e.g. Iglesias, 2004; Davala et al., 2015; Chuliá y Miyar, 2019). Así, por ejemplo, entre las personas perceptoras de rentas mínimas de inserción en 2015 (Tabla 1) son más las mujeres las que proporcionalmente dejan de recibirlas por haberse incorporado al mercado laboral (52,5% de mujeres frente al 47,5% de hombres). De manera similar, la tasa de emprendimiento en 2015 entre las personas con discapacidad de 45 y 64 años representaba el 72%, 20 puntos más que entre las personas sin discapacidad (ODISMET, 2017: 58). De hecho, como subraya Miller (2019: 116): “Los debates acerca de las limitaciones para poner en marcha programas comprehensivos de mantenimiento de rentas deberían

centrarse más en la capacidad económica de los países y regiones para mantenerlos, que en los potenciales efectos no deseados de estos sistemas que, a partir de la evidencia disponible, no parecen muy importantes”.

Así, teniendo en cuenta que las mujeres son quienes mayoritariamente se encargan de los trabajos de cuidados y quienes también reciben rentas mínimas, muy por debajo del umbral de la pobreza, se propone realizar a continuación un cálculo aproximado de la equiparación de tales rentas al salario mínimo.

En la Tabla 2 se muestra un ejemplo del coste estimativo que supondría equiparar las rentas mínimas al salario mínimo interprofesional, desagregando por Comunidades Autónomas y atendiendo a diversos criterios correctores:

(1) Tasa de personas dependientes de cada persona titular perceptora de renta mínima (RMI).

(2) Índice de Desarrollo Humano (IDH).

(3) Huella ecológica energética per capita (HE energía).

Se aprecia que los porcentajes totales sobre el PIB nacional serían muy pequeños (alrededor del 0,3% anual en 14 pagas, unos tres mil millones de euros) y, en cambio, contribuirían a paliar muchas situaciones de pobreza y precariedad, con el consiguiente efecto multiplicador en la economía nacional y regional si los trabajos domésticos y de cuidados se contabilizaran mediante algún tipo de moneda electrónica complementaria o banco del tiempo. Tampoco son notables las diferencias según el criterio corrector (1) y (2), personas dependientes e IDH, salvo para Madrid y País Vasco que salen algo más perjudicadas y Andalucía que sale más favorecida con la estimación según IDH.

Tabla 2. Estimación de compensaciones de rentas mínimas 2017 por CCAA y según diversos factores de corrección

CCAA	Cuántia hasta SMI (900–RMI)	Beneficiarios de RMI (2017)	Estimación 1: con dependientes (en euros)	% (1)	Estimación 2: con IDH 2017 (en euros)	% (2)	Estimación 3: con HE energía 2000 (en euros)	% (3)	Δ% (2)-(1)	Δ% (3)-(1)
Andalucía	493,8	102.680	36.216.773	17,69	47.443.973	23,17	47.081.805	22,99	+5,48	+5,31
Aragón	428,0	25.183	6.298.876	3,08	5.920.943	2,89	2.519.550	1,23	-0,18	-1,85
Asturias	457,0	68.357	21.085.066	10,30	21.928.469	10,71	21.085.066	10,30	+0,41	0,00
Baleares	469,6	13.154	3.545.950	1,73	4.609.734	2,25	1.418.380	0,69	+0,52	-1,04
Canarias	423,1	25.369	5.722.428	2,79	7.324.707	3,58	7.439.156	3,63	+0,78	+0,84
Cantabria	469,7	14.147	3.654.736	1,78	3.800.925	1,86	2.558.315	1,25	+0,07	-0,54
Castilla-L. M.	479,6	11.146	3.833.922	1,87	5.137.456	2,51	3.833.922	1,87	+0,64	0,00
Castilla y León	469,7	36.643	9.929.928	4,85	9.830.628	4,80	9.929.928	4,85	-0,05	0,00
Cataluña	336,0	67.985	14.002.464	6,84	12.182.144	5,95	5.600.986	2,74	-0,89	-4,10
Valencia	511,5	51.312	15.306.638	7,48	16.837.301	8,22	10.714.646	5,23	+0,75	-2,24
Extremadura	469,7	16.853	4.949.229	2,42	6.928.920	3,38	6.433.998	3,14	+0,97	+0,73
Galicia	496,6	30.512	7.967.450	3,89	8.445.497	4,12	7.967.450	3,89	+0,23	0,00
Madrid	500,0	117.420	40.968.500	20,01	27.039.210	13,20	16.387.400	8,00	-6,80	-12,00
Murcia	469,7	13.649	3.864.692	1,89	4.714.924	2,30	2.705.284	1,32	+0,42	-0,57
Navarra	300,0	35.514	5.878.800	2,87	4.644.252	2,27	2.351.520	1,15	-0,60	-1,72
País Vasco	227,3	142.029	17.317.532	8,46	12.295.448	6,00	17.317.532	8,46	-2,45	0,00
La Rioja	469,7	2.424	1.138.553	0,56	1.024.698	0,50	796.987	0,39	-0,06	-0,17
Ceuta	600,0	967	422.400	0,21	587.136	0,29	422.400	n.d.	+0,08	n.d.
Melilla	441,4	3.855	1.262.845	0,62	1.995.296	0,97	1.262.845	n.d.	+0,36	n.d.
TOTAL	439,5	779.199	204.766.566	100	204.766.566	100	204.766.566			

Fuente: Elaboración propia a partir de Chulíá y Miyar (2019: 8) y Junta de Extremadura (2011: 135).

En cambio, las diferencias sí aumentan entre la estimación con el factor de corrección (1) por dependientes a cargo del titular de RMI y la estimación (3) con el factor de corrección por huella ecológica energética por habitante del año 2000. En este caso nuevamente Andalucía sale

favorecida, pero entre las más perjudicadas están Madrid y Cataluña, y en menor medida Valencia, Aragón, Navarra y Baleares.

La propia naturaleza humana es creativa y productiva per se. Incluso la riqueza natural, la flora y la fauna, aportan valor a la vida humana en sociedad, sin quererlo, sin contrato, sin coacción, sin premeditación. La clave está en saber gestionar esa biodiversidad natural y riqueza con inteligencia, por eso la especie humana es la especie *homo sapiens*, pese a que paradójicamente esté a punto de alcanzar el punto de no-retorno en su lucha contra el cambio climático, en la conservación del planeta, de su propio hábitat. Es la hora del despliegue de la *biodiversidad monetaria*, en palabras de Bernard Lietaer (Gisbert, 2010).

Resulta cuando menos curioso que sí existan estimaciones y cálculos de la economía sumergida, del fraude económico y de los sectores de actividades delictivas y, en cambio, apenas hay estudios sobre los beneficios que generan otras actividades económicas (Cottingham, 2009), también al margen de la contabilidad y estadísticas públicas oficiales, pero que sí producen más efectos positivos que negativos sobre la economía del país. Por ejemplo, la actividad económica y comercial que gira alrededor de las monedas sociales, locales y complementarias, de las cuales algunas generan riqueza que se incluye en la contabilidad del PIB porque les afecta el mismo régimen fiscal que a la moneda de curso legal (entre esas monedas locales destacan en España el Varamedí, la Grama y el Eusko).

2.3.3.2. Cotización subrogada y sostenibilidad medioambiental

Entre esas externalidades positivas, que suponen además una transferencia de renta (subrogada) hacia terceros, estaría la huella ecológica que hemos mencionado más arriba, sólo parcialmente

compensada en aquellos lugares y destinos que incorporan alguna tasa o tarifa turística a los visitantes para el mantenimiento de los recursos y atractivo turístico de esa ciudad o entorno. En particular, la brecha entre las huellas ecológica extremeña y española ha aumentado entre 1990 y 2005, pasando del 64% al 107% (Junta de Extremadura, 2011). La brecha se ha incrementando en esos 15 años a una media de casi 3 puntos porcentuales anuales. Concluyéndose que el estilo de vida de un extremeño medio necesita menos huella ecológica que el de un español promedio. Este efecto positivo sobre la calidad de vida no está contabilizado ni remunerado ni incentivado explícitamente en ninguna política pública nacional ni europea. ¿A cuánto ascendería el montante total de cotizaciones generadas y subrogadas por la sociedad extremeña por este capítulo relacionado con los trabajos y tareas de mantenimiento, conservación y sostenibilidad medioambiental del territorio? Como se ve, la “España vaciada” no sólo lo es de personas.

En un hipotético mercado de huellas ecológicas, que podría ser similar o no al de emisiones de CO₂, sería factible calcular la compensación o montante de ingresos por cada punto porcentual existente en la brecha de huella ecológica entre una región y la media nacional. Además se podrían modular de forma progresiva los incrementos porcentuales, de manera que a mayores aumentos e intensidad de la brecha la tasa compensatoria fuera también gradualmente creciendo. También sería factible introducir factores de ponderación según el Valor Añadido del sector agrario, principal eje vertebrador de la sostenibilidad medioambiental de una economía o según otros indicadores (como el IDH o la tasa de pobreza).

¿Cuáles serían los efectos positivos de una estructura financiera basada en monedas complementarias virtuales (incluso como renta

básica) ligada a las cotizaciones subrogadas derivadas de la conservación medioambiental típica de áreas rurales? Un efecto positivo sería el freno y reversión de los procesos de despoblamiento. Mitigando además las frecuentes tasas de pobreza de esos territorios. Y aumentando el atractivo para la empleabilidad y el emprendimiento social en sectores económicos clave de base tecnológica y medioambiental.

2.3.4. Políticas públicas de afloramiento de cotizaciones subrogadas

El modelo de Creasy para analizar las conductas fraudulentas ha sido aplicado a diversos ámbitos de estudio y sectores económicos, desde la agricultura al turismo. Basado en las tipologías de autoridad de Weber, se trata de un modelo que interrelaciona los tres ejes principales de toda conducta corrupta: el incentivo, la oportunidad y la legitimidad (Cendrowsky *et al.*, 2007), y nos sirve para explicar la preponderancia y vigencia de determinadas estructuras sociales relacionadas con el fraude y la economía sumergida. En particular, en nuestro caso, nos sirve para estudiar, desde una óptica de políticas públicas, la persistencia de las conductas fraudulentas relacionadas con el no afloramiento de las cotizaciones subrogadas.

Se trata de un enfoque típico de coste-beneficio para interpretar la efectividad de diversas políticas públicas de ayudas económicas condicionadas (como subvenciones o subsidios ligados al cumplimiento de una serie de obligaciones) de acuerdo con dos conductas clave de los potenciales participantes: Cumplidores reales y cumplidores aparentes (incumplidores enmascarados como cumplidores). Esto es, se distingue, por un lado, la adopción real de los compromisos asumidos de quienes se acogen a los beneficios de dicha política social y, por otro lado, la adopción aparente de los requisitos exigidos con el único fin de obtener

los beneficios o ventajas fiscales, aunque sin cumplir realmente los compromisos supuestamente aceptados. Como se observa, en la gestión administrativa de este plan público juegan un papel importante los controles e inspecciones, así como el presupuesto disponible y los costes asociados para llevarlas a cabo.

Para nuestro caso entenderemos que la conducta fraudulenta consiste en no aflorar (o aflorar parcialmente) las cotizaciones subrogadas, partiendo de un hipotético contrato previo en el que se intercambia trabajo por salario (junto con todos los derechos inherentes a él, en particular, la cotización a la Seguridad Social).

El modelo de Creasy asume formalmente que los participantes muestran una actitud neutral hacia el riesgo, aunque pueden incorporarse también las actitudes aversas al riesgo, si bien este comportamiento averso al riesgo de los agentes incumplidores (enmascarados como cumplidores) cambia los resultados cuantitativamente, en cambio no varía el carácter cualitativo del análisis (Giannakas y Kaplan, 2005: 24, nota 7).

También asumiremos que el afloramiento de las cotizaciones subrogadas es socialmente lo más eficiente y beneficioso, puesto que aumenta los retornos netos de igualdad económica de todos los participantes, aunque en menor cuantía (desde una óptica individual) para los participantes menos convencidos y más propensos al incumplimiento.

La línea divisoria entre agentes cumplidores y no cumplidores vendrá determinada por un doble factor de compromiso (cumplimiento) que separa a ambos grupos de agentes, generando diversos escenarios posibles según los beneficios esperados. Por un lado, la percepción y

nivel de compromiso social frente al fraude, esto es, el nivel de consenso. Por otro lado, el nivel de coerción, los mecanismos de desincentivo y de sanción de las conductas fraudulentas. Tal nivel de compromiso social puede reforzarse con otras recompensas (en especies o monetarias).

Así, los agentes que se enmascaran como “afloradores” esperan obtener una ganancia mayor que si se mantuvieran en la economía sumergida. Cuanto menor número de controles e inspecciones y sanciones haya (para comprobar el cumplimiento o no de los requisitos de afloramiento), mayor será el incentivo para adoptar el rol de cumplidor-aparente aunque realmente no cumpla o solo cumpla parcialmente.

Una referencia básica que podemos utilizar para enmarcar nuestra reflexión sería la expuesta por Giannakas y Kaplan (2005) acerca de la participación en un programa público de adopción de buenas prácticas y tecnologías sostenibles. Una forma plausible de aplicación del análisis de Giannakas y Kaplan (2005) al caso de las cotizaciones que se expone en este trabajo debería tener en cuenta varias cuestiones. En primer lugar, nuestro enfoque se basa principalmente en la consideración de asimilar los conceptos de “adoptante”, “no adoptante” y “falso adoptante” que los autores utilizan de forma genérica para referirse a los participantes en un plan o programa público de incentivos o ayudas económicas para que implementen una serie de buenas prácticas y tecnologías sostenibles que sin el apoyo público serían costosas de asumir de forma privada. En particular, asumiremos lo siguiente:

1º) El perfil del “no adoptante” sería en nuestro análisis el caso de la situación de “subrogación”, es decir, la de aquellos agentes que prefieren seguir manteniéndose en la informalidad y no participar en

ningún plan de afloramiento de cotizaciones. Les compensa más la situación de irregularidad y clandestinidad que la de regularizar y aflorar las cotizaciones correspondientes.

2º) El perfil del “adoptante” sería el que se corresponde en nuestro caso con la situación de “no subrogación”, es decir, la de aflorar realmente las cotizaciones por todo el trabajo realizado y no transferirlas a terceros.

3º) El perfil del “no adoptante enmascarado como adoptante” o “falso cumplidor” (de los criterios de condicionalidad para recibir ayudas públicas) se asimila en nuestro ejemplo al de un “falso afloramiento de cotizaciones” para obtener fraudulentamente alguna ventaja económica o fiscal de un hipotético plan público de regularización, afloramiento o incentivo a las cotizaciones sociales. Es, sin duda, el perfil que más distorsiona la efectividad de las políticas públicas y el que justifica el debate aquí realizado, con la finalidad obvia de identificar y atajar las posibles conductas de fraude en la contratación laboral.

En términos generales, cualquier política pública de afloramiento de cotizaciones subrogadas debe contemplar un principio básico de racionalidad, esto es, que conforme aumente el nivel de concienciación y compromiso social (por consenso y/o coerción), mayor sea la posibilidad de encontrarnos en una zona en la que las ventajas o beneficios de no subrogar sean superiores con respecto a otros escenarios, esto es, de participar en la economía formal sin defraudar. Una forma de incentivar esta transición, en el corto plazo, sería a través de mayores controles e inspecciones sobre las condiciones laborales. Aunque en el largo plazo debería primar la conciencia social y la tolerancia social cero contra el fraude, esto es, a través de procesos de transformación cultural y

educativa en el área de la legitimación social. En confluencia con la acción legal e institucional en las áreas relacionadas con los incentivos y las oportunidades para delinquir.

En particular podemos plantearnos dos hipótesis de partida atendiendo a los factores de cumplimiento relacionados con las medidas de consenso y coerción antes señalados. Hipótesis que pueden ampliarse posteriormente, en futuras investigaciones, incluyendo más factores y condicionantes que hagan más complejo y preciso el análisis.

En la primera hipótesis (sistema social coercitivo) cabe plantearse una situación social muy tolerante y propensa al fraude económico, por lo que podríamos encontrar con tres escenarios o fases preliminares posibles que van evolucionando hacia estadios menos fraudulentos conforme va aumentando la probabilidad de ser inspeccionado (las medidas de coerción aquí son más importantes que las de consenso):

Primera fase o escenario: En la que el beneficio de no aflorar las cotizaciones es superior a cualquiera otro. Y donde, además, el beneficio de no subrogar es el menor de todos. En este escenario hay más incentivos para hacerse pasar por cumplidor aflorando (supuestamente) las cotizaciones, aunque realmente no sea así.

Segunda fase o escenario: El beneficio de no aflorar las cotizaciones sigue siendo comparativamente el superior, pero se va reduciendo la diferencia con respecto al beneficio de no subrogar conforme aumenta la percepción de ser inspeccionado. Los incentivos para no aflorar o hacerlo ficticiamente se van reduciendo.

Tercera fase o escenario: A partir de cierto nivel de ser inspeccionado el beneficio de no subrogar comienza a ser superior a otros escenarios y va creciendo más rápidamente según aumenta el nivel de compromiso social en la lucha contra el fraude.

En la segunda hipótesis (sistema social de consenso) se plantea la previsión de una situación social con baja tolerancia hacia el fraude y alta capacidad de inspección, donde igualmente nos podemos encontrar con tres escenarios o fases posibles. Teniendo en cuenta que en esta nueva transición podría producirse un resultado que potenciaría los efectos positivos en este contexto, esto es, que el beneficio de no aflorar sea decreciente conforme aumenta la posibilidad de ser auditado. En parte porque la tolerancia social hacia el fraude es mínima o casi inexistente, por lo que conforme aumente el nivel de compromiso social irán disminuyendo los potenciales beneficios de defraudar haciéndose pasar por (un supuesto) cumplidor. Y en parte porque existen los controles suficientes que desincentivan esa conducta fraudulenta.

Primera fase o escenario: Igual que en la primera hipótesis, para bajos niveles de inspección y de ser multado puede seguir dándose el caso en el que el beneficio de no aflorar (o falso afloramiento) sea superior al de cualquier otra conducta.

Segunda fase o escenario: En este tramo el beneficio de subrogar, de mantenerse en la informalidad, permanece por encima del beneficio de no subrogar. Si bien en esta fase lo más importante es cuando el beneficio de no subrogar supera al del falso afloramiento, cuya tendencia creciente nos llevaría a la última fase.

Tercera fase o escenario: De manera similar al tercer escenario de la hipótesis primera, a partir de cierto nivel, de nuevo el beneficio de no subrogar no solo es superior a cualquier otra posibilidad, sino que es el máximo.

En resumen, los principales resultados esperados se derivan de los niveles de cumplimiento e incumplimiento de los agentes participantes y de los beneficios asociados a tales conductas, las cuales varían según las condiciones y características de la política de regulación de las cotizaciones. En particular, desagregando según los tres ejes fundamentales del fraude y buscando priorizar las medidas de consenso sobre las de coerción, podemos señalar lo siguiente:

1) A nivel de Oportunidad: Un modelo de no-subrogación-aparente aprovecha la oportunidad de vulnerabilidad laboral y genera incentivos para que los agentes incumplidores se enmascaren como cumplidores para obtener los beneficios de un contrato laboral por menos horas de las realmente trabajadas. Situación que se vería mitigada, por ejemplo, con una política pública que impulsara o una moneda complementaria virtual para este tipo de transacciones o una renta básica.

2) A nivel de Incentivo: El comportamiento incumplidor aumenta con los costes de adopción de los requisitos legales de cotización. Mientras que disminuye si existe una menor tolerancia social hacia el incumplimiento, junto con otras recompensas y reconocimientos. La opción de subrogar se vuelve menos atractiva si existe, por ejemplo, la posibilidad de intercambiar servicios domésticos mediante alguna moneda electrónica complementaria emitida por una autoridad bancaria central (Banco de España) o de recibir una Renta Básica Universal.

3) A nivel de Legitimidad: Los requisitos de un modelo de nosubrogación de las cotizaciones provocan un doble efecto (directo e indirecto) sobre los falsos cumplidores. Por un lado, un aumento de los potenciales beneficios aumenta los incentivos para el incumplimiento (efecto directo) y, por otro lado, los reduce debido a los costes de oportunidad asociados a la conducta incumplidora (efecto indirecto). La magnitud de estos efectos dependerá no solo de la probabilidad de ser inspeccionado y multado, también de las medidas de legitimidad y consenso que se arbitren desde las políticas públicas. En concreto, la frecuencia de las inspecciones estará en función de los costes de monitorización de los agentes y del presupuesto disponible, el cual sería ampliable fácilmente, por ejemplo, con la emisión de una criptomoneda complementaria de ámbito nacional o europeo y de un sistema fiscal más progresivo y redistributivo que contemple, por ejemplo, un impuesto a las grandes rentas y a los grandes beneficios.

2.3.5. Conclusiones

“La discriminación no solo reside en prohibir el acceso a las aulas. Hay discriminaciones menos evidentes, pero igual de importantes, por ejemplo en el lenguaje, en la historia, en el diseño de instrumentos, en el modo de definir la economía o la riqueza, en la gestión de la administración de justicia”.

(María Ángeles Durán, Revista Grada, 2018, 123: 6).

En este trabajo se han expuesto de forma preliminar algunos elementos básicos para el desarrollo de una nueva subdisciplina dentro de la Economía del Derecho referida a la gestión de la transferencia de derechos económicos, principalmente del ahorro transferido como

cotización subrogada, que va más allá de una mera externalidad económica. Para ello se han sugerido diversas medidas de políticas públicas, como el aumento de la progresividad fiscal, la implementación del derecho a la renta básica universal (RBU) o la emisión de una moneda virtual complementaria (incluidos los bancos del tiempo) y/o creación de entidades bancarias especializadas en el registro y tutela de tales derechos derivados del tiempo de trabajo dedicado a actividades vitales para la economía en general y para las familias en particular (los cuidados y los servicios domésticos y del hogar), pero comúnmente fuera de las estadísticas públicas oficiales y que son realizadas mayoritariamente por mujeres. Trabajos invisibles que contribuyen a la riqueza nacional pero que no computan en el PIB ni en la referencia de otras variables como el déficit o la deuda.

Se ha visibilizado y descrito la realidad de un sistema subrogado de ahorro para la jubilación que debe enfrentar de raíz los problemas de feminización de la pobreza ligados a las mal llamadas ‘pensiones no contributivas’ que perciben principalmente las mujeres. Además se ha conectado la importancia de ese nuevo sistema de financiación basado en el afloramiento de cotizaciones subrogadas (mediante la emisión de alguna moneda virtual complementaria o incluso desarrollando el derecho a la garantía de ingresos mínimos) con los nuevos cambios tecnológicos y financieros, incluyendo sus eventuales efectos negativos sobre el empleo.

Sin olvidarnos de la protección medioambiental, aflorando igualmente las cotizaciones derivadas de menores huellas ecológicas que son producidas socialmente por los habitantes de aquellas regiones eminentemente rurales y agrarias y más proclives a sufrir los problemas de despoblación. Sustituir las rentas mínimas de inserción por

compensaciones que superen el umbral de la pobreza no implicaría efectos contraproducentes en la empleabilidad y el emprendimiento, ni consecuencias graves de estigmatización social. Además su coste presupuestario sería mínimo, pudiendo incluso financiarse parcialmente a través de un sistema de monedas virtuales complementarias, desincentivando la economía sumergida, impulsando las finanzas éticas, mejorando la contributividad del sistema y estableciendo una garantía de ingresos sostenidos con derechos sociales y de jubilación.

Futuras investigaciones habrán de profundizar en el desarrollo de los aspectos teóricos propuestos en este trabajo, así como en la aplicación empírica de los datos disponibles para afinar el ajuste de los distintos escenarios posibles y de transición sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Siendo uno de los elementos clave la evaluación de los distintos programas de rentas básicas aplicados hasta el momento, puesto que España sigue siendo de los países europeos con menor capacidad redistributiva después impuestos. En particular, será de interés el estudio de la medida del Ingreso Mínimo Vital propuesta por el Gobierno de España en junio de 2020 para paliar los efectos económicos de la reciente cuarentena por el coronavirus, crisis que ha sido provocada en gran parte por la creciente subfinanciación del sistema sanitario público y la continua precarización de las pensiones públicas de jubilación.

2.3.6. Agradecimientos

A mis compañeras y compañeros del Departamento de Economía y de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura. También a los amigos de Baladre, a la Marea Básica, al movimiento feminista y a los movimientos sociales por su concienciación y lucha por un mundo mejor. Con aprecio especial a Marilé Calvo, Tedo Castro, Beatriz Muñoz, Ana Latas y Paloma Adán. Y por último a los miembros del Jurado que han revisado y evaluado este trabajo, cuyas sugerencias y recomendaciones han mejorado sustantivamente la versión final. Obviamente las imprecisiones y errores que hubiera son de exclusiva responsabilidad del autor.

2.3.7. Bibliografía

Arcarons, J.; Domènech, A.; Raventós, D. y Torrens, L. (2014). “Un modelo de financiación de la Renta Básica”. SinPermiso. Barcelona.

Calaza, J.J. y Güell, J. (2012). “Para entender la europeseta electrónica”. Faro de Vigo, 02/12/2012. Disponible en <https://bit.ly/2Lg3Aoj> [Acceso: 02/12/2019].

Carrasco, C. (ed.) (2014). Con voz propia. La Oveja Roja. Madrid.

Castro, T. (2018). Itinerarios de poder y liderazgo. IMEX. Mérida.

Cendrowsky, H.; Martin, J.P. y Petro, L.W. (2007). The Handbook of Fraud Deterrence. John Wiley & Sons. Hoboken.

Chuliá, E. y Miyar, M. (coord.) (2019). Pobreza y rentas mínimas. Panorama Social, 29, primer semestre. Funcas. Madrid.

Cottingham, M. (2009). A Bit Rich. New Economics Foundation. London.

Davala, S.; Jhabvala, R.; Standing, G. y Kapoor, S. (2015). Basic Income. A Transformative Policy for India. Bloomsbury Academic. London.

De Miguel, A. (2015). Neoliberalismo sexual. Cátedra. Madrid.

De Villota, P. (2011). Impacto de la crisis económica en el trabajo doméstico remunerado. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid.

Etxezarreta, M. e Iglesias, J. (2019). Cuento de las pensiones. Icaria. Madrid.

Franco, J.A. (2018a). Do we live in a Marxian world? Technological and Economic Development of Economy, 24(1): 271-294.

Franco, J.A. (2018b). Análisis crítico de la ultraderecha neoliberal y la singularidad española. En González, G.; García, S. y Gayol, A. La Investigación Actual y Sus Retos Multidisciplinares. Gedisa. Madrid, pp. 139-154.

Franco, J.A. (2020). Renta Básica: Análisis crítico con perspectiva de clase. Aula Magna. Madrid.

Fullbrook, E. y Morgan, J. (2019). Introduction: Whither MMT? Real-World Economics Review, 89: 2-4.

Giannakas, K. y Kaplan, J.D. (2005). Policy design and conservation compliance on highly erodible lands. Land Economics, 81(1): 20-33.

-Gisbert, J. (2010). Vivir sin empleo. Los libros del lince. Barcelona.

Iglesias, J. (2006). ¿Hay alternativas al capitalismo? Baladre, Zambra. Málaga.

Iglesias, J. (coord.) (2004). Vivir donde quieras. Baladre, Zambra. Málaga.